
ESTUDIOS

ASPECTOS CONCEPTUALES Y EPISTEMOLÓGICOS

POLÍTICA PÚBLICA, (AGRO) AMBIENTE Y GEOGRAFÍA RURAL: REFLEXIONES CRÍTICAS SOBRE DOS DÉCADAS DE INVESTIGACIÓN EN GRAN BRETAÑA

Carol Morris

Senior Research Fellow, Centre for Rural Research, Department of Geography,
University of Exeter

RESUMEN

La relación entre la geografía y las políticas públicas en Gran Bretaña ha sido recientemente objeto de un vivo debate en dos revistas punteras de geografía – ‘Transactions of the Institute of British Geographers’ y ‘Progress in Human Geography’. Este artículo engarza con tal debate con el fin de diseñar un marco que posibilite explorar las relaciones entre la Política Agro-Ambiental (PAA) y la geografía rural; un área de política pública diseñada para mejorar la sustentabilidad ambiental en el sector agrícola y que ha tenido su desarrollo desde mediados de los años 80. Tres áreas de la investigación en geografía rural sobre PAA son identificadas y discutidas: los estudios de participación de los agricultores; los análisis institucionales y políticos de la PAA; y los análisis post-estructuralistas de la PAA. El artículo concluye con una consideración sobre la profundidad del impacto en la política agroambiental de este cuerpo de investigación y propone algunas sugerencias para su mejora.

Palabras clave: Geografía rural, política pública, política agro-ambiental, análisis de política públicas superficial y profundo.

ABSTRACT

The relationship between geography and public policy in the UK has recently been the subject of lively debate in two leading geographical journals – the ‘Transactions of the Ins-

Fecha de recepción: noviembre 2004.

Fecha de aceptación: enero 2006.

titute of British Geographers' and 'Progress in Human Geography'. This paper draws on this debate to provide a framework for exploring rural geography's relationship with agri-environment policy (AEP); an area of public policy designed to improve the environmental sustainability of the agricultural sector and which has been developing apace since the mid 1980s. Three areas of rural geographical research on AEP are identified and discussed: farmer participation studies; institutional and political analyses of AEP; and post-structural analyses of AEP. The paper concludes with a consideration of the depth and impact on policy of this body of research and makes suggestions for improving its policy reach.

Key words: Rural geography, public policy, agri-environment policy, shallow and deep policy analysis.

RÉSUMÉ

Les rapports entre la géographie et les politiques publiques en Angleterre deviennent l'objet d'un débat vigoureux dans deux grands revues scientifiques, 'Transactions of the Institute of British Geographers' et 'Progress in Human Geography'. Cet article se nourrit de ce débat pour présenter un cadre d'analyse des rapports entre la géographie rurale et la politique agri-environnementales, un domaine de politique publique destiné à améliorer la durabilité environnementale de l'agriculture qui se développe depuis les années 1980. Trois thèmes de recherche en géographie rurale consacrée aux politiques agri-environnementales sont identifiés et examinés, des études sur la participation des agriculteurs, des analyses politiques et institutionnelles et des analyses post-structurelles des politiques agri-environnementales. L'article se termine avec une réflexion sur la profondeur et sur l'impact de ces recherches sur la politique elle-même et propose quelques suggestions pour augmenter cet impact.

Mots clé: Géographie rurale, policie publique, politique agrienvironnementale, politique superficielle et profonde.

INTRODUCCIÓN

Esta contribución explora las relaciones entre la geografía rural en el Norte de Europa (y en Gran Bretaña en particular¹) y las políticas públicas diseñadas para integrar la agricultura y el medio ambiente. El periodo de análisis de este artículo comprende las últimas dos déca-

1 Yo soy consciente que al centrarse este artículo en Gran Bretaña corro el riesgo de ser excesivamente crítica en lo que la geografía rural ha fallado previamente, de pastoralismo y etnocentrismo. En todo caso, existen un buen número de razones para este objeto geográfico. Primero, que la mayoría de la investigación geográfica rural publicada en revistas de lengua inglesa sobre política agroambiental se refiere a las Islas Británicas y el autor en su revisión de investigación no ha incluido publicaciones en otras lenguas (excusas por esto). Segundo, por la atención restringida a un particular contexto geográfico que proporciona coherencia sobre las particularidades y la estructura y organización de la agricultura y la industria alimentaria, siempre dentro de la comunidad académica británica (carrera y estructuras institucionales, fondos de investigación, etc.). Tercero, un foco geográfico que también fuera manejable en una revisión.

das, desde mediados de la década de los años 80 hasta el presente. Este periodo ha quedado marcado por el desarrollo, implantación y evaluación de una variedad de políticas públicas que conjuntamente han mejorado la sustentabilidad ambiental en el sector agrícola, a las que se les ha etiquetado como política agroambiental (PAA). Las PAA han sido definidas como «cualquier política implementada por agencias agrícolas o ministerios, mediante fondos destinados a mantener presupuestos de agricultura, y que están dedicados principalmente a reforzar y estimular la producción de bienes ambientales, como productos resultantes compuestos de alimentos y fibras» (Hanley et al., 1999, p. 67). La historia de la PAA no tiene mucha trayectoria, pero suficiente para indicar que emerge a inicios de los años 80 en el contexto de los debates sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC) ante el incremento de las evidencias sobre el impacto negativo de la agricultura en el ambiente. Piezas clave de la legislación asociada, a un nivel de la Unión Europea, han sido: el artículo 19 del año 1985 que enmendaba la Regulación de Estructuras Agrarias, 797/85/EEC (que fomenta, pero no demanda, la implementación de las áreas ambientalmente sensibles entre los estados miembros); las ‘medidas de acompañamiento’ de 1992 en el marco del paquete de reforma de la PAC de 1992, Regulación 2078/92/EEC (que obligaba a cada estado miembro a desarrollar e implantar programas agro-ambientales y dedicar un 50 - 75% de la co-financiación desde el presupuesto agrícola); por último, la Regulación de Desarrollo Rural de 1999 de la Agenda 2000 de la reforma de la PAC, con un extenso soporte financiero procedente del programa europeo PAA. En Gran Bretaña, una plétora de programas agroambientales han sido implantados como resultado de estas regulaciones, los más significativos (en términos de soporte financiero, área cubierta y número de agricultores participantes) son el programa de Areas Ambientalmente Sensibles (AAS) o el programa Countryside Stewardship Scheme (CSS) en Inglaterra, con sus variantes en Escocia y Gales. Aún cuando estos programas PAA presentan muchas similitudes con aquellos que operan en los estados del norte de Europa, es importante precisar que en el debate político en Gran Bretaña sobre las interacciones agricultura-ambiente ha quedado centrado en el paisaje y en la conservación del hábitat y la vida silvestre, rasgo que ha sido descrito como una peculiaridad de la preocupación británica. El desarrollo de regulaciones en relación a ‘gestión de recursos’, entendido en términos de agua, aire o suelo ha sido lento en su emergencia, siempre vista en el contexto de un conjunto de cambios con la Directiva de la Unión Europea del Agua y la reciente publicación de la Estrategia del Suelo para Inglaterra.

Una considerable literatura procedente de la geografía rural ha sido producida en los últimos 20 años fruto de la PAA, incluso se podría decir que el esfuerzo de investigación ha sido notable en relación al impacto de la PAA en la industria agrícola tanto en términos de política macro, como a un nivel de agricultor. Este artículo realiza una revisión selectiva y, ofrece algunas reflexiones críticas, sobre el esfuerzo de investigación. Inicialmente, el artículo plantea la relación entre geografía y políticas públicas. En tal sentido, recoge el reciente debate sobre la cuestión (publicado en *Transactions of the Institute for British Geographers and Progress in Human Geography*), que ponen el acento en dos formas de investigación sobre políticas públicas en la geografía (‘superficial’ y ‘profunda’), con el fin de ayudar a interpretar la subsecuente revisión de la investigación en PAA en la geografía rural. Esta revisión identifica y discute tres tipos de investigación en esta área: los estudios sobre participación del agricultor; los análisis institucionales y políticos del PAA; y los análisis post-estructura-

les del PAA. La relativa superficialidad y profundidad en estas áreas de trabajo y su impacto político son consideradas en la sección de conclusión.

I. GEOGRAFÍA Y POLÍTICA PÚBLICA

Los geógrafos británicos, al menos aquellos con interés en el objeto de este trabajo, han llegado a estar recientemente preocupados por la relación entre su disciplina y la política pública. Esto ha sido señalado en un reciente debate en dos las revistas líderes en geografía en Gran Bretaña, *Transactions of the Institute of British Geographers* (TIBG) (Peck, 1999; Massey, 2000; Pollard et al., 2000; Banks and Mackian, 2000; Peck, 2000) y *Progress in Human Geography* (Hoggart, 1996; Martin, 2001; Lee, 2002; Dorling y Shaw, 2002; Martin, 2002; Massey, 2002). No obstante, el interés disciplinar en la interfaz geografía-política ha tenido una larga historia, mayor de lo que esta reciente eclosión de actividad intelectual sugiere. Por ejemplo, en el TIBG de 1974, David Harvey estuvo preocupado por la habilidad de los geógrafos para contribuir en el éxito, significación y efectividad en la formación de políticas públicas. Buena parte de este análisis fue pesimista, sugería que la geografía y los geógrafos (Británicos) han, particularmente desde el final de la segunda guerra mundial, llegado a ser mayordomos del 'estado corporativo', un cuerpo «which instructs downwards in the interests of finance capitalism» (Harvey, 1974, p. 23). En referencia al artículo de Harvey en su editorial del TIBG, 25 años más tarde, Peck (1999, p. 131) argumenta que la relación entre investigación geográfica y el proceso político permanece forzado, con los geógrafos humanos habitualmente ausentes de «sustantivos debates políticos». En términos similares, de acuerdo con Martin (2001, p. 193) «the scale of involvement of geographers in, and their influence on, public policy remains comparatively limited», una situación que es marcadamente similar en otros disciplinas a situation that is markedly different in other disciplines (Dorling y Shaw, 2002). El problema, de acuerdo con Peck (op cit), hace relación al hecho que «academic practice tends to privilege abstract and 'scientific' knowledge over practical and policy-oriented knowledge... [and that the] two modes of inquiry are increasingly regarded as mutually incompatible... While academic research appeals, with its cerebral and 'pure' processes of library-based learning and thoughtful contemplation, to the privileged scientific canon, policy research is often tainted by its association with cash, clients, contracts and reports-in-cardboard covers». Massey (2000, p.132) plantea, criticando la aparente «complete separation between applied research, theory and what tends to be called 'blue-skies research'» y la tendencia entre muchos geógrafos «to value the latter two over the first, whilst government values the first and sees the last as a kind of luxury».

La devaluación de la investigación sobre políticas identificada por Peck y Massey dentro de la geografía humana en su conjunto, es un proceso que es evidente en la geografía rural específicamente, aunque todavía no ha sido del todo articulado en forums publicables (ver Morris y Evans, 1999, para una lectura inicial). En todo caso, ello se pone de manifiesto 'por detrás de las escenas', conducido en susurros entre miembros escépticos de la subdisciplina entre las sesiones de conferencias y en corredores de departamentos como la siguiente anécdota sirve para ilustrar. Cuando escribía este artículo yo había tenido un encargo, con un colega, de una parte de la investigación sobre políticas de la England's

Countryside Agency². Frustrado por varias razones por esta investigación el colega planteó que ella no podía esperar a que el trabajo estuviera completo para que pudiera «tomar alguna investigación *real*» (énfasis de la autora) por ejemplo escribir artículos para su publicación en revistas altamente valoradas por el Research Assessment Exercise (ver nota a pie 4) y preparar propuestas de investigación ‘académicas’ para su financiación por el British Social Science Research Council³. En cualquier caso, para los geógrafos en general y para los geógrafos rurales en particular, embarcarse en ‘trabajos sucios’ de investigación en política pública puede hacer correr el riesgo de ser acusada de ‘ciencia mala’ o ‘investigación de segunda clase’, «of selling out or dumbing down» (Peck, 1999, p. 134). Como Martin (2001, p. 198) hace notar «doing policy research is hardly the way to make a geographic career». Varias razones para este desafortunado estado de cosas son propuestas, incluyendo: la política económica de la investigación universitaria y particularmente la presiones desde el Research Assessment Exercise de Gran Bretaña⁴; la erosión del idealismo político dentro de la academia (Peck, 1999; Martin, 2001); y el «postmodern / textualist / discursive and cultural ‘turns’ that have had such a pervasive impact across the subject in the last few years» que han quedado retiradas por la presión de problemas políticos (Martin, 2001, p. 194). En todo caso, los cambios en el terreno epistemológico, teórico y empírico de la geografía son el resultado de demandas para un ‘más modesto conocimiento’ o ‘humildad post-moderna’ que milite frente a «bold, unrestrained policy recommendations based on ‘abstract fundamentals’» (Pollard et al., 2000, p. 245).

Al margen de todas estas consideraciones y preocupaciones, la mayoría de los geógrafos embarcados en el reciente debate pueden estar de acuerdo con la posición de Peck «policy research is a legitimate, non-trivial and potentially creative aspect of the work of academic geographers» (1999, p. 131) y «it remains one of the ways to effect change» (Peck, 1999, p. 133). En todo caso, Martin (2001, p. 190) construye una situación límite, planteando que el «pursuit of a geography of policy [is] neither idealistic or futile. The reality is that policy-making of one kind or another is a prominent and pervasive feature of modern society,

2 La Countryside Agency es el cuerpo legal que en Inglaterra trabaja para: conservar y preservar el campo; promover la equidad social y la oportunidad económica para las personas que viven en él; ayudar siempre, a aquellos que residen en el campo a tener los estándares nacionales.

3 El corolario de esto es que colegas con una gran experiencia en la investigación sobre políticas públicas y notoriedad han sido igualmente críticos de los geógrafos rurales por la ‘pobreza en la concepción y ejecución’ de la investigación relativa a políticas públicas. En todo caso, una anécdota sirve para ilustrar esto. En la conferencia anual de la Rural Economy and Society Study Group realizada hace pocos años, fue presentado un comentario crítico por un geógrafo rural sobre el entonces recientemente publicado English Rural White Paper (un tipo de documento gubernamental que contenía las claves políticas para esta cuestión particular). Un colega indicó entonces que el ponente no había entendido nada del documento político y que esto era típico de ‘este tipo de geógrafo’ (mejor conocimiento de las contribuciones teóricas de la sub-disciplina) que mi colega percibía que eran alteradas desde el ‘mundo real’ de la política pública.

4 El Research Assessment Exercise (RAE) opera con un ciclo de cinco años sobre todas las instituciones de alta educación británicas y basada en un panel de juicios de los resultados publicados de investigación y otras actividades profesionales, determina la cantidad de fondos de investigación que son destinados a la investigación (o ‘unidades de medida’) para los siguientes cinco años. Ello ha llegado a tener alta competencia y significado, pero también notables críticas, en la mayoría de las disciplinas académicas. Es también un proceso en el que, la «geography, like other disciplines, has promoted the ‘pure’ or the ‘scholarly’, rather than the ‘applied’, despite its disciplinary claims to ‘real world’ applicability» (Pollard et al., 2000, p. 245).

affecting the daily lives of us all. As geographers we should be striving to inform and shape the process and improve the outcomes». Además, «policy is much too important to be left to the policy makers» (Martin, 2001, p. 206). No obstante, no toda investigación en políticas es la misma, y algunos tipos de trabajo pueden tener más impacto en los procesos políticos que otros. Así, una distinción ha sido concedida entre «policy analysis as a narrow, technical concern to be tackled within the confines of state(d) aims and objectives (geographers-as-impact-evaluators, conducting 'shallow' policy analysis)» y concepciones del proceso regulador «as a contested, politicised domain in which the parameters and exclusions of policy making are themselves objects of critical investigations (geographers-as-state-theorists, conducting 'deep' policy analysis)» (Peck, 1999, p. 132). Cuando Peck sugiere que hay una habitación tanto para la política profunda como superficial en geografía, si los geógrafos pretenden elevar la jerarquía de la política, y conceder a sus efectos una influencia política al nivel nacional, ellos necesitan hacer mayor esfuerzo en el análisis regulador profundo que dirige «the fundamentals of policy design and the regulatory rules of the game itself» (Peck, 1999, p. 135). La distinción entre 'superficial' y 'profundo' en el análisis de regulaciones proporciona una caracterización útil de la investigación en políticas en geografía que puede ayudar a interpretar la revisión de los trabajos de los geógrafos rurales en la PAA que se realiza más abajo.

Esta es una distinción, no obstante, que no ayuda a delinear la forma precisa ni el método para entender la investigación en políticas en la geografía, ni sus productos. Esto representa otra característica del reciente debate, además que esta frustrado por su falta de detalle. Pero, para Peck (1999) puede parecer que la investigación sobre políticas es 'comisionada' por una variedad de (típicamente o quizás habitual nivel nacional⁵) decisores políticos en ministerios; un trabajo que en primera instancia tiene como fruto un informe para el cliente. Este es un tipo de producto de investigación que es conocido colectivamente como 'literatura gris', que en todo caso, puede ser transformada posteriormente en artículos académicos publicables (un proceso que normalmente requiere la aprobación del cliente). Esta forma de trabajo en políticas públicas es también puesto de manifiesto por Massey (2000), particularmente aunque no exclusivamente, en la provisión de una 'base de evidencias' para la política. Cuando un grupo de éstos autores también identifican investigación sobre políticas en forma de escritos sobre regulaciones en el rango estándar de los foros académicos (artículos publicados, libros y proceedings de conferencias), ellos están de acuerdo en que raramente constituyen 'compromisos críticos o activos' con el proceso regulador en si mismo. Todo esto, «might involve writing a ministerial briefing or evaluation report, but equally it might take the form of protest, opposition, or the development of practical, alternative strategies» (Peck, 2000, p. 255). A toda esta lista se puede añadir traslados temporales de académicos a ministerios, ubicaciones en paneles de revisores gubernamentales (a nivel nacional, regional y local), y contribuciones a seminarios y eventos similares donde los decisores políticos también pue-

5 El nivel nacional enfatizado en el análisis de Peck (1999, 2000) es respondido por Pollard et al (2000) y Banks y Mackion (2000). Pero estos comentarios han tenido también lugar en otras altas escalas del trabajo en política pública, en cualquier caso en «feed into corporate, university and community (charities and voluntary organisations) policy agendas» (Pollard et al., 2000, p. 247).

den participar⁶. La naturaleza y extensión de la implicación de los geógrafos rurales en la políticas es el objeto de la siguiente sección.

II. GEOGRAFÍA RURAL E INVESTIGACIÓN EN POLÍTICA PÚBLICA Y LA INTERFAZ AGRICULTURA-MEDIO AMBIENTE

En el contexto de la geografía rural, y de las geografías rurales de las relaciones agricultura-medio ambiente en particular, la acusación que la geografía ha llegado a estar de manera paulatina desligada del proceso político y por lo tanto de forma incremental ser 'irrelevante' (Peck, 1999) puede, o podría verse, alejada de la verdad. Los geógrafos rurales han actuado, en su conjunto, de muy de buena voluntad de una parte a otra en la investigación sobre políticas. En todo caso, este tipo de trabajo ha sido instrumental en el desarrollo de la naturaleza y finalidad de la subdisciplina (desde el tiempo de emergencia hasta que es reconocida como una parte de la geografía en Gran Bretaña a principios de los años 70), particularmente si los procesos de planeamiento están incluidos dentro de la definición de investigación sobre políticas. Como Cloke y Moseley (1990, p. 123) observan en su revisión de la geografía rural en Gran Bretaña, «it is hard to think of any rural geographer, or piece or recent research in rural geography, not explicitly focusing on a pressing policy issue. Nearly all contemporary research is at least applicable if not applied». Cuando estos autores aplauden la preocupación por la relevancia, ellos quieren poner también el acento en que «there is room for debate about whether more fundamental research is being neglected» (Cloke and Moseley, op cit). No obstante, la sub-disciplina se ha movido desde esta revisión (ver Morris y Evans, 1999; Roche, 2002; Morris y Evans, 2004 como algunas de las más reciente revisiones y reflexiones), pero todavía es posible decir que una importante y adecuadamente soportada área de investigación en la geografía rural contemporánea hace relación a las cuestiones de políticas públicas. Esto no es menos verdad dentro de la parte de la geografía rural que se preocupa por la interfaz agricultura-medio ambiente.

Antes de volver al objeto de este trabajo, es preciso realizar una breve reflexión sobre como los geógrafos *rurales* han estado vivos en los procesos sobre políticas públicas. El trabajo de Harvey (1974) que analiza la geografía y la política pública ofrece alguna ayuda en este sentido. El ofrece una lista de factores que probablemente son significativos en el trabajo de los geógrafos en la investigación sobre políticas: ambición personal; la reputación y el estatus de la disciplina; la necesidad social; y la obligación moral entendida como característica que «political engagement and policy advocacy are both indispensable elements of the committed public intellectual» (Peck, 1999, p. 134). A esta lista puede añadirse la radicalmente alterada economía política de la investigación universitaria desde el comentario de Harvey en los años 70, fruto de la generación de ingresos desde otras fuentes que las convencionales (por ejemplo, docencia de pregrado y postgrado), un objetivo cada vez más significativo dentro de los departamentos universitarios. No obstante, en términos de

6 Un ejemplo de este tipo de actividad en el dominio rural puede incluir una reciente serie de seminarios organizados conjuntamente con el Department of Environment, Food and Rural Affairs (Defra) y el Economic and Social Research Council, donde un buen número de reconocidos geógrafos rurales de Gran Bretaña fueron invitados para dar conferencias con una audiencia de académicos, ONGs y funcionarios gubernamentales.

geografía rural en particular puede ser argüido que la propia naturaleza de muchas cuestiones rurales se presta a un enfoque aplicado, y en el caso de la agricultura en particular, la intervención del Estado ha constituido una significativa fuerza para el cambio, como para que ningún estudioso de este sector ignore la política y su peligro. En el caso específico de la PAA es probable que los geógrafos rurales estén atraídos por la investigación y análisis de esta nueva forma de política sobre todo debido a que es una política inherentemente espacial (operativa en áreas tipo o designadas) y ofrece un nuevo camino interesante para la investigación en agricultura, un área de la geografía rural que durante los años 70 y principios de los 80 ha sido señalada «every sign of diminishing returns» (Bowler and Ilbery, 1987, p. 327). También, quizás debido a la joven generación de geógrafos con una orientación ambientalista / conservacionista, que proporciona una oportunidad de avanzar en la agenda ambiental, dentro de un sector económico que ha sido notoriamente resistente al cambio y sucesivamente resiste las regulaciones ambientales (Lowe et al. 1986; Baldock et al., 1990), esta es una ilustración del punto de vista de Harvey (1974) sobre la racionalidad de la ‘ambición personal’ y ‘la obligación moral’.

Como indicaba en la introducción, el cuerpo de trabajo producido en la PAA en los pasados 20 años ha sido considerable, tanto dentro de la geografía rural y en disciplinas afines como la sociología rural (e.j. Clark y Lowe, 1992; Bager y Proost, 1997) y la economía agrícola (e.j. Whitby, 1994; Gourlay y Slee, 1988; Hanley et al, 1999; Edgell, 2000; Falconer, 2000; Whitby, 2000). Tal es el volumen de la investigación relativa a la PAA, que es prácticamente imposible realizar una revisión sistemática. Tres áreas de trabajo en la geografía rural son destacadas y discutidas, pero estas pueden no ser entendidas como comprensivas de todo el trabajo. Inevitablemente, todos los artículos de revisión pueden correr el riesgo de ser criticados por haber omitido contribuciones particulares de investigación y esto no deja de ser una verdad en estas líneas. No obstante, las fronteras han sido trazadas para construir tareas manejables y la investigación que no esta incluida no puede ser entendida como de menor calidad, simplemente que no encaja fácilmente en las tres áreas principales o tipos de trabajos que son identificados⁷. Las tres áreas de trabajo son las siguientes: estudios sobre la participación de agricultores; análisis institucionales y políticos de la PAA; y análisis post-estructurales de la PAA. La relativa ‘profundidad’ de cada una de estas áreas de trabajo (de acuerdo con la categorización de Peck (1999)) y su habilidad para enlazar e influir el proceso político regulador es objeto de consideración en la siguiente sección de discusión.

1. Estudios de participación de los agricultores

A continuación de aparecer, en 1986, en la escena política de la agricultura de Gran Bretaña la primera iniciativa sobre PAA, la regulación de Areas Ambientalmente sensibles (AAS), la investigación en geografía rural realizó un esfuerzo inicial en relación a la cartografía de esta nueva iniciativa y a generar alguna evaluación preliminar sobre su impacto

⁷ Justo un ejemplo es la investigación de Rob MacFarlane que adopta el acercamiento ecológico del paisaje para el análisis de la PAA (MacFarlane, 1998 y 2000).

previsible⁸. Por ejemplo, Potter (1988) discute los fundamentos de la regulación AAS y su estatus como un instrumento de política agrícola y ambiental, antes de los primeros datos de los censos agrícolas describe la estructura agraria y el uso del suelo dentro de las áreas designadas. De forma similar, Brotherton (1990 y 1991) proporciona un temprano análisis de la variación espacial en los niveles de adopción de la regulación AAS (medidas en términos de número de agricultores y explotaciones afectadas con tierra y la tierra afectada), siempre usando datos secundarios. Este mismo autor también ha estado preocupado por poner de manifiesto diversas condiciones de la regulación, tal como el pago de tasas y algunas prescripciones de gestión (e.j. fechas de siega), y cómo pueden haber afectado al agricultor. Este trabajo temprano ilustra como ha sido la emergencia de la geografía en la participación en PAA, y explica como algunas AAS tienen mayor nivel de participación que otras.

Este tipo de evaluación del impacto de la PAA, basado en estadísticas oficiales más que en datos primarios, rápidamente sugiere una evaluación más detallada de los factores y procesos que influyen la participación del agricultor en la nueva regulación de PAA, conducidos en buena parte por su naturaleza voluntaria (e.j. Moss y Chilton, 1990/91; Morris y Potter, 1995; Battershill y Gilg, 1997; Morris y Young, 1997; Wilson, 1997a; Lobley y Potter, 1998; Morris et al., 2000; Wilson y Hart, 2000). En otras palabras, para analizar por qué los agricultores no han querido entrar en estas regulaciones, interesa conocer las características de los que han participado y de los que no han querido, tanto en términos de las características de los agricultores (e.j. su edad, educación, composición familiar, uso de consejeros), como de sus explotaciones (e.j. tamaño, tipo, tenencia, estructura empresarial, dependencia de los ingresos agrarios, nivel de endeudamiento). Investigadores y decisores políticos están interesados en conocer qué particulares tipos de agricultores y explotaciones están más inclinados a adoptar regulaciones de PAA, que en última instancia podría conducir a una posible modificación de la regulación y /o el comportamiento de los agricultores en relación a adoptar aquello que actualmente se resisten a poner en funcionamiento.

La influencia de los acercamientos fundados en el comportamiento en geografía han sido establecidos en este contexto y en particular a través del uso de los modelos de ‘adopción-innovación’ que previamente han sido aplicados en el análisis de las innovaciones agrícolas tales como las ayudas para mejoras agrícolas (e.j. Jones, 1963; Bowler, 1979)⁹. El esfuerzo de investigación para este fin ha sido inevitable, incluyendo necesariamente, la recogida de datos primarios, normalmente a través de encuestas o de entrevistas con agricultores. De manera incremental, los mejores esfuerzos de investigación se han dirigido a definir un claro perfil de participantes y no participantes en la PAA, fundados en un conjunto de caracte-

8 La regulación sobre AAS ha sido denominada por el gobierno de Gran Bretaña regulación ‘de bandera’ de PAA y como tal la mayoría de la investigación de implantación se ha preocupado de esta iniciativa política en Gran Bretaña, pero también dentro de artículos publicados en PAA en otros países del norte de Europa que han utilizado las revistas de lengua inglesa (e.j. Primdahl y Hansen, 1993). En Inglaterra, el Countryside Stewardship Scheme (CSS) ha llegado a ser la segunda regulación bandera en PAA, habiendo sido introducida la primera en 1991 como una iniciativa piloto y con tal carácter fue sucesivamente tomada en consideración y expandida por el Ministerio de Agricultura en 1996.

9 El análisis del comportamiento ha sido un profundo legado dentro de la investigación en geografía agrícola, tal que algunos investigadores han sido incapaces de escapar de él (Morris y Evans, 1999; ver también Burton, 2004 a).

rísticas de agricultores y explotaciones¹⁰. En este sentido, Morris y Potter (1995, p. 57) en su estudio de los participantes en dos áreas del sur de Inglaterra, plantean que «differences between adopters and non-adopters are small across a range of situational and personal variables...a fact possibly explained by the highly flexible nature of the schemes on offer and their 'goodness of fit' with a variety of farming systems and farm situations». De manera similar, en un estudio siguiente de Lobley y Potter (1998, p. 422) en el que los participantes y no participantes en la AAS se comparan con los del Countryside Stewardship Scheme (CSS), concluyen que las características relativas a la edad del agricultor y el tamaño de la explotación «are not easily reconciled with those of other ELMS¹¹ researchers who suggest that participants are more clearly defined in terms of age and farm size».

Quizás por esta característica, los investigadores han redirigido su investigación a nivel de explotación en PAA hacia algunos de los aspectos más subjetivos de la participación y no participación de los agricultores, en particular sus actitudes ambientales y motivos de adopción, construidas sobre una larga tradición de trabajos en la geografía rural y en la sociología rural que exploran las actitudes de conservación de los agricultores previas a la evolución de la PAA (e.j. Newby et al, 1977; Carr y Tait, 1991). Una vez más, se han producido un considerable número de investigaciones de este tipo (e.j. Morris y Potter, 1995; Wilson, 1996; Battershill y Gilg, 1996, 1997; Beedell y Rehman, 2000; Wilson y Hart, 2000 y 2001). En primera instancia este tipo de trabajos atendían a las diferencias actitudinales entre agricultores participantes y no participantes, particularmente respecto a la actividad de conservación y 'al medio ambiente' más generalmente. Potter y Gasson (1988) (y Gasson y Potter, 1988) por ejemplo, se preocupan de la relación entre las actitudes ambientales de los agricultores y de las restricciones estructurales, identificando un grupo de seguimiento, pro-conservacionistas con grandes explotaciones interesados en diversificar la mayor parte de terreno por escasa que sea la compensación media; también identifican otro grupo, pequeño, de agricultores condicionados financieramente (incluso cuando existen evidencias de actitudes ambientales positivas) donde existe una resistencia probable a la participación. Wilson (1996, p. 127) estudia la participación en la AAS que soporta esta temprana conclusión y enfatiza que «*both attitudes and socio-economic factors have to be considered when understanding participation behaviour. For example, farm size is shown to largely determine ESA eligibility and so on farms of marginal ESA eligibility, farmers environmental attitudes may be most important for decision-making about participation*». En aparente contradicción a todos estos estudios, la investigación entre los participantes en las regulaciones AAS en el sureste de Inglaterra por Battershill y Gilg (1997), sugiere que la influencia de las actitudes e intenciones del agricultor son probablemente más significativas que los factores socio-económicos y geográficos en la explicación del comportamiento del agricultor, dando estos investigadores una llamada

10 En una perspectiva retrospectiva, el esfuerzo dedicado al desarrollo de perfiles de participantes y no-participantes ha desplazado quizás el interés sobre los altos niveles de participación en Gran Bretaña y sobre los grupos clave en las regulaciones de PAA. Además, buena parte de este trabajo puede ser más fácil a través del estudio de datos de participantes por el Defra, aunque no siempre están disponibles para los investigadores por razón de confidencialidad.

11 Environmental Land Management Scheme – un término que es utilizado para describir las regulaciones de PAA.

para un mejor entendimiento de cómo las actitudes, valores y culturas de los agricultores pueden formarse, construirse y cambiar.

A lo largo del tiempo, el interés en la dimensión actitudinal de la participación en la PAA ha cambiado, hacia las diferencias actitudinales y motivacionales *dentro* del grupo participante. Como Wilson y Hart (2000, p. 2162) plantean, «understanding motivations of farmers to participate in AESs is crucial in any investigation of the effectiveness of these schemes». Esto ha tenido una consideración importante porque, «policy measures which encourage positive attitudes to conservation will in the long-term be more effective than those that do not, since a positive shift in attitudes will increase the output of conservation goods at any specified level of budgetary cost» (Coleman et al., 1992, p. 69). En todo caso, «understanding how schemes may affect farmers' attitudes is vital as moves towards conservation oriented attitudes through scheme participation may ensure the continuation of environmentally-friendly farming practices, even if financial incentives for countryside management were to come to an end or were substantially modified» (Wilson y Hart, 2001, p. 255). También, ha sido realizado un notable esfuerzo para distinguir tipos de agricultores participantes (y también no participantes) basados en sus actitudes ambientales y motivaciones, que han fundado el desarrollo de tipologías actitudinales.

Dentro de estas tipologías un grupo de agricultores pro-conservacionistas ha sido identificado como característico de las PAA regulaciones debido a que sus motivaciones en relación a la protección ambiental fundamentan un comportamiento que ha sido encarnado bajo la denominación participantes 'activos' por Morris y Potter (1995), 'cuidadores' por Lobley y Potter (1998), y 'entusiastas reguladores' por Wilson y Hart (2000). La cara contraria de estos participantes son el grupo de participantes menos entusiastas, que están atraídos por los incentivos financieros que ofrecen y la 'buena disposición' entre la regulación y su estructura de la explotación agraria, más que en las oportunidades ambientales ofrecidas. Este grupo ha sido etiquetado como 'participantes pasivos', 'cumplidores' y 'participantes neutrales' por Morris y Potter (1995), Lobley y Potter (1998), y Wilson y Hart (2000) respectivamente. De manera relevante, a través de estos trabajos diferentes tipos de PAA han sido denominados por las motivaciones de los participantes bajo distintas preocupaciones. Tanto Lobley y Potter (1998) y Wilson y Hart (2000) se han referido al 'narrow y deep' acercamiento a la atracción del CSS participantes activos / cuidadores / entusiastas reguladores, cuando el 'cercano y superficial' acercamiento al AAS ha llamado a los participantes pasivos, cumplidores y participantes neutrales. No obstante, estas tipologías actitudinales han sido recientemente criticadas por Fish et al. (2003), que plantea que las actitudes de los gestores de tierra y las practicas raramente están contenidas dentro de una categoría o tipo. Esta investigación argumenta que es más efectivo pensar en términos de 'estilos de participación' más que en diferentes tipos de agricultores. Identifica cuatro estilos de participación y cuatro estilos de no participación Fish et al. (2003) propone que estos estilos no son mutuamente excluyentes y que los gestores individuales de tierra pueden suscribir un número de estilos en una única propiedad o explotación de acuerdo con una determinada parcela o características del paisaje. Este acercamiento al análisis de la participación en la regulación PAA es justo una indicación de cómo la investigación en esta área continúa y ha llegado a ser cada vez más sofisticada.

El desarrollo de lo indicado arriba sobre el tipo y objeto de los estudios de participación de agricultores ha sido resumido por Morris y Potter (1995) y esta reproducido en este texto en la Figura 1.

Figura 1
LA CO-EVOLUCIÓN DE LAS PRIORIDADES POLÍTICAS Y DE INVESTIGACIÓN EN PAA

Etapas en el desarrollo de políticas	Piloto	Consolidación	Madurez
Prioridades políticas	Maximización del valor experimental de las regulaciones: - incremento de la tasas de participación dentro de las poblaciones clave; - monitorización de las relaciones entre tasas de pago y condiciones de las regulaciones y modelos y tasas de participación.	Ajuste y refinamiento del diseño de la regulación y actuación para asegurar el valor ambiental por ayuda. Extensión futura de la participación mediante la mejora y retirada de barreras a la entrada. Maximización de los efectos adicionales.	Salvaguarda y sustentabilidad ambiental de los beneficios ambientales producidos. Mentalidad cuidadora inculcable. Creación de un sector de gestión del campo.
Prioridades de investigación en Geografía Rural	Cuantificación: - numero de agricultores participantes; - niveles de adopción a lo largo del tiempo; - Superficie afectada (proporción de explotaciones – conjunto / parte de explotación).	Perfiles y comparaciones entre participantes y no participantes. Identificación de los factores de ‘resistencia’ y barreras de entrada.	Motivos y características de participantes y no participantes. Evidencia de cambio actitudinal e incremento de áreas de análisis

Fuente: Adaptado de Morris y Potter (1995).

Este nivel de implantación de los estudios de PAA ha contribuido indudablemente a entender los impactos a largo y corto plazo de la regulación de PAA y, en un sentido amplio, a conocer como los agricultores se están adaptando a un cambio de política ambiental con un consiguiente énfasis en la sustentabilidad ambiental. Específicamente, esta investigación ha revelado que las actitudes de los agricultores están cambiando como resultado de la PAA, por ejemplo que han llegado a tener una orientación más conservacionista por influencia de la regulación agroambiental. Una gran parte de estos trabajos concluyen normalmente con sugerencias para el refinamiento de la política y su cambio, con indicaciones que muchas veces los autores trasladan directamente a los decisores políticos. Hay, no obstante, algunas

dificultades notables. Por ejemplo, a un nivel práctico, tal ha sido la cantidad de trabajos que se han realizado en este periodo (conducidos por geógrafos rurales como académicos y también en su papel de consultores del gobierno en el seguimiento y evaluación de la PAA) que los agricultores están afectados ahora por la ‘fatiga investigadora’ y ha llegado a ser progresivamente más difícil en la evaluación de PAA la participación de proyectos de investigación. Más profundamente, el acercamiento ‘bottom-up’ para evaluar la política de este área de trabajo no proporciona un completo entendimiento del proceso de implantación de políticas y corre el riesgo de llegar a convertirse «trapped in the worldviews of the policy recipients, thereby failing to acknowledge other important factors which may also influence the implementation process» (Hart y Wilson, 1998, p. 257). En respuesta a esta corriente crítica, algunos geógrafos rurales han dirigido su atención a examinar los aspectos institucionales de los procesos de implantación de PAA a un nivel internacional, nacional y inter-institucional, incrementando el uso de la segunda área del análisis de PAA.

2. Análisis políticos e institucionales del PAA

En dos artículos relacionados de Hart y Wilson (1998) y Wilson et al. (1999) son examinadas las respuestas a nivel estatal en la Regulación Agro-ambiental de la UE 2078/92/CEE (en Gran Bretaña, Alemania y España respectivamente). Se argumenta que aceptar esta variabilidad es necesaria porque «only if the differences in policy implementation between EU countries are better understood can policy makers begin to reshape and rethink management mechanisms for the protection of the European countryside» (Hart and Wilson, 1998, p. 256). Esta perspectiva es abordada en algunos artículos a través de la aplicación de un modelo de implantación de políticas diseñado por Winter (1990). Este modelo contiene cuatro ‘caras’ «which are of varying pertinence depending on the particular facet of the implementation process under investigation», e incluye: «‘the character of the policy formation process’ (principalmente a un nivel estatal); ‘organisational and inter-organisational implementation behaviour’ (e.j. cultura administrativa y capacidad); ‘street-level bureaucratic behaviour’ (e.j. ...actores implicados en ‘conformación’ de regulaciones agro-ambientales a los agricultores); y la ‘respuesta de los grupos de destinatarios’ (e.j. los mismos agricultores)» (Hart y Wilson, 1998, p. 257). Los esfuerzos han sido dirigidos a las dos primeras caras en artículos insígnis en el marco de los factores institucionales a nivel estatal (o «estructuras de implantación» (Wilson et al., 1999, p. 198) considerando el proceso de implantación de la PAA en un diverso número de contextos geográficos. Un análisis detallado de su contenido revela que «variations in implementation are mostly a case of money and contrasting bureaucratic structure, and that the position of a country on a ‘spectrum’ ranging from the productivist to post-productivist may be the most crucial explanation for the relative enthusiasm (or lack thereof) of a country towards Regulation 2078» (Wilson et al., 1999, p. 199).

Mientras que estos estudios sobre la implantación de la PAA, tienen un nivel institucional, otros investigadores se han movido en el *producto* de la política, concretado en el *diseño* y *formulación* de la PAA con el fin de construir algunas «assessment of the public policy significance» (Clark et al., 1997, p. 1869) en el proceso de ambientalización que presenta la PAA. Un temprano ejemplo de este tipo de trabajo es realizado por Baldock et al. (1990) en un estudio de áreas AAS, y en un AAS en particular: Somerset Levels y Moors. La pre-

ocupación de estos autores aparece de manera superficial similar a aquellos que engloban el nivel de investigación de agricultor, en que pueden dejar una «describe the provenance and implementation of ESAs and [to] assess their impact» (p. 143). No obstante, a través del análisis de los documentos y entrevistas con una variedad de actores que intervienen en el proceso político (e.j. no sólo agricultores) Baldock et al., ponen de relieve que el nivel nacional de política asociado con el desarrollo de AASs y el nivel local de política alrededor de la implantación de esta regulación dentro de Somerset Levels y Moors. Algunas de estas observaciones dejan una conclusión pesimista, por ejemplo: «*There is now a strong sense that a phase of confrontation [between farmers and conservationists] has come to an end and that a period of real environmental enhancement is under way. Crucially, attitudes have changed and the orientation of the NFU and CLA¹² is now, for instance, very constructive*» (p. 156). Al mismo tiempo, no obstante, es advertida una precaución como «*ESAs have enabled a renovation of the 'permissive corporatism' which has, in the post-war period, been the approach to state involvement in the regulation of agriculture preferred by farming and landowning interests*» (p. 157). En otras palabras, el relativo efecto de la regulación de AAS en Gran Bretaña es atribuido a los esfuerzos del lobby agrícola en colocar «*the initiative in the continuing debate over the future of the countryside*». Conclusiones similares han sido alcanzadas por Edgell y Badger (1996) en su 'nueva economía política', un análisis del desarrollo de la AAS escocesa. No obstante, estos autores también sugieren que «*the choice of policy instrument has been largely driven by the requirements of the policy administrators, fulfilling neither all the requirements of the environmental nor the farming interests*» (Edgell and Badger, 1996, p. 29).

El papel de los administradores políticos y otras 'élites agrícolas' es explorado con detalle en dos estudios de Clark et al (1997) y Clark y Jones (1998), que están planteados desde la literatura científica política y administrativa. En el primero de estos artículos, Clark et al. exploran la extensión de las preocupaciones ambientales en el campo de la política agrícola en Europa y como han sido asimiladas y los caminos que existen en las estructuras políticas y preceptos que han mediado los procesos de ambientalización. Hay particular interés en cómo *ideas* de los distintos grupos de interés han tenido relevancia en la construcción de la PAA. Su análisis, basado en entrevistas con políticos tomadores de decisiones así como en la interpretación de documentos políticos, revela que la construcción política, denominada 'Europa Verde', deriva de los principios fundamentales de la PAC, y ha impregnado el desarrollo de la PAA en la UE. Esta construcción ha determinado «*those issues perceived as critical by policy elites in member states, favouring certain mechanisms for implementation of this policy over others, and ensuring the pre-eminence of cultural values over more objective scientific criteria as the modus operandi of policy in the longer term*». Para estos autores PAA no representa un cambio en el corazón de los principios políticos agrícolas (estos son, el mantenimiento de la estabilidad rural y el papel del agricultor como un actor clave en la (re)estructuración del espacio rural), en cualquier caso, ellos han sido diseñados para asegurar la continuación en el mantenimiento de estos principios.

En una contribución posterior, de Clark y Jones (1998), el foco institucional se mantiene, pero el análisis es confinado a Inglaterra y específicamente al papel de las comportamientos

12 NFU = National Farmers Union; CLA = Country Landowners Association.

agrarios en la evolución de las políticas agro-ambientales en el periodo 1981-92. Los comportamientos agrarios propagados por MAFF y grupos de productores tienen la finalidad de proveer «a structure for agricultural policy formulation by ... dictating the range of policy instruments available to agricultural elites for particular problems; and, in turn, policy formulation and implementation have redefined agrarian beliefs, ... in the recasting by MAFF of the environmental responsibilities of the UK farmer between 1988-92. Thus, agrarian beliefs have provided MAFF with a language of mediation through which interactions with a wide spectrum of externality groups have been handled, enabling the ministry to keep debate within clearly prescribed parameters. However, by contesting 'dominant' agrarian beliefs, environmental NGOs have obliged MAFF to substantiate its rhetorical claims for UK farmers through the introduction of policies supportive of 'environmental stewardship'. These policies have been promulgated by the ministry as being in the 'national interest', but in practice they have been more effective in furthering organisational and producer group ambitions» (p. 2241). Esta conclusión en todo caso reitera las observaciones tempranas de Baldock et al. (1990) en relación a la ESA. Este acercamiento institucional a la PAA proporciona unas lentes diferentes en el dominio político, respecto al detalle del nivel de implantación de agricultor y ofrece valiosas aportaciones en la política agrícola y la regulación ambiental. Específicamente, esta forma de abordaje geográfico ha sido crucial para revelar la extensión de la PAA y como sus 'subsidijs verdes' han sido utilizados para legitimar el continuado soporte público en el sector agrícola y como, en este proceso, los intereses ambientales han sido comprometidos.

3. Análisis-post estructurales de la PAA

El área final de la investigación geográfica rural que se considera ahora es probablemente la menos desarrollada, y menos definida que las otras dos, y ha sido influenciada por una variedad de acercamientos conceptuales que reflejan el 'giro cultural' en la geografía rural (Cloke 1997; Little, 1999; Morris y Evans, 2004). La medida ha sido muy debatida, con una característica común conectada con el 'diverso rango de actividades de investigación y perspectivas teóricas' constitutivo del giro cultural que es, «a commitment to epistemologies, often loosely labelled 'post-structural' that emphasise the contingency of knowledge claims and recognise the close relationship among language, power and knowledge. Both epistemologically and in the construction of new empirical research objects, the cultural turn is best characterised by a heightened reflexivity toward the role of language, meaning and representations in the constitution of reality and knowledge of reality» (Barnett, 1998, p. 380). Así, en el contexto de estudios de la PAA, los investigadores han tomado interés en: la controvertida medida de la naturaleza y el medio ambiente dentro de este programa político; y el diferente conocimiento que ha tenido en la formulación e implantación de la PAA.

Dentro de este contexto las específicas regulaciones agro-ambientales y otras localidades de alto valor natural, la investigación ha llegado a cubrir los diferentes caminos por los que los agricultores 'construyen' el medio ambiente, y particularmente las contrastadas medidas y significados de la naturaleza, y su gestión, entre agricultores y los llamados 'expertos' ambientales, e.j. en organizaciones conservacionistas y decisores políticos (Carr y Tait, 1991; McEachern, 1992; Walsh, 1997; McHenry, 1998). Dicho esto, los estudios han adoptado un

acercamiento 'social constructivista', al rechazar las perspectivas realistas de la naturaleza y enfatizar la inseparable naturaleza y sociedad y el carácter contingente temporal y espacial a través de los que las personas llegan a entender y aplicar la medida de la naturaleza y el medio ambiente (MacNaughton y Urry, 1998; van Koppen, 2000). Como Burgess *et al.* (2000, p. 120) resume, esta «social and cultural research has shown that farmers and conservationists may view the same landscapes or species, but see them quite differently». El estudio etnográfico de McEachern (1992, p. 168) en Yorkshire Dales National Park, por ejemplo, detalla cómo los responsables del Parque «often perceived as 'dreadful' and 'ugly' the parts of the landscape which the farmers most admired: the pastures and fields extending far up the fellsides, destroying diversity and wildlife habitats».

Los conflictos y negociaciones que toman lugar y la interfaz entre local / profano y científico / experto, las formas de conocimiento y 'el conocimiento-cultural' también han llegado a ocupar a los investigadores en PAA (Clark y Murdoch, 1997; Harrison *et al.*, 1998; Burgess *et al.*, 2000; Morris, en prensa). Un importante tema que actualmente emerge ha sido el específico conocimiento local por los agricultores, que es creado en buena medida a través de la experiencia de trabajo a pie de terreno, y que presenta un importante papel en la realización de los contratos ambientales pero también en la evaluación de las regulaciones resultantes. Como Wilson (1997b, p. 307) aserta, en el contexto de la evaluación del impacto ambiental de la regulación de Areas Ambientalmente Sensibles: «...farmers usually know their land better than other actors, and are, therefore, in a good position to evaluate subtle changes over large areas on their farms that are intractable even with the most sophisticated...permanent monitoring plots...Yet, positivist quantitative approaches are often seen as providing more 'solid' information than the more 'intangible' knowledge that local actors may have about the ecology of their area». En todo caso, la preocupación ha sido expresada en las regulaciones de PAA, que se desarrollan bajo conocimiento científico (o experto), están en el contexto, que los conocimientos locales que ayudan a los agricultores y a otros gestores de tierra que participan en estos esquemas, con consecuencias negativas para el medio ambiente, los agricultores y, últimamente, para el conjunto de la sociedad. Ha sido sugerido que un mejor diálogo o negociación entre diferentes conocimientos es requerido en orden a alcanzar el óptimo ambiental, con los políticos tomadores de decisiones y los implantadores decididos a incorporar el conocimiento local a través de acuerdos tipo con los agricultores, y los agricultores se encuentran más abiertos a la ciencia que domina las prescripciones de las regulaciones. Como indica Burgess *et al.* (2000, p. 131): «Nature in general, and wetlands in particular, might be better aided if scientific conservation were to concede more ground to local knowledge and local specificity. And if farmers were to give more recognition to the invisible wildlife that shares their space, but is not part and parcel of their everyday lives». Todos estos investigadores han tenido información potencial sobre nuevos conocimientos y prácticas que puedan contribuir a través de su específico desarrollo a la PAA, pero también a conseguir metas sociales generales consistentes en el desarrollo de sistemas agrícolas más sustentables.

La observación de que algunas formas de conocimiento particulares (notabilidad, científica) están privilegiadas sobre otras (conocimientos locales) dentro del contexto de debates políticos sobre regulaciones agro-ambientales, ha llevado a algunos investigadores a adoptar la teoría del actor network (ANT) (e.j. Clark y Murdoch, 1997; Lowe y Ward,

1997; Burgess *et al.*, 2000; Morris, 2004). La ANT aserta en particular, una visión o entendimiento ‘post-estructuralista’ del mundo social, en el que su originador, o ‘entidad inicial’, de una idea o concepto del mundo social, con el fin de realizar dicha idea, necesita implicar otros actores en el programa «which places the initiating entity as the representative of the whole network and its objective as representative of the interests of each of the actors» (Woods, 1997, p. 322). En el caso de la PAA, «la ‘idea’ es poner de manifiesto la integración o conservación dentro de toda práctica agrícola, que es materializada a través de prescripciones científicas, acciones y técnicas detalladas dentro (regulación de PAA) de acuerdos, y donde los protagonistas son (principalmente pero no exclusivamente) funcionarios antes que científicos» (Morris, 2004, p. 179). La aplicación de ANT al análisis de la PAA ha encontrado diferentes marcos de conocimiento de la agricultura y el medio ambiente que están alimentados por diferentes actores, pueden ser agricultores, residentes locales, ambientalistas, y políticos tomadores de decisiones que consideran que el ‘medio ambiente’ en sí mismo debe ser tratado simétricamente, o sobre unas bases iguales, sin distinciones apriorísticas que se puedan establecer entre diferentes categorías. Esto, no obstante, es un punto de vista más controvertido y no está universalmente aceptado dentro de la comunidad de investigadora. En todo caso, ANT es considerado por algunos como un medio de sobreconocimiento de tendencias antropocéntricas en los estudios de relaciones sociedad-naturaleza en las ciencias sociales en general y en el contexto específico de las relaciones agricultura-medio ambiente.

Cuando la PAA algunas veces aparece más como vuelta atrás en la emergente serie de análisis postestructuralistas, es probable que los investigadores pretendan elucidar las recomendaciones políticas desde su trabajo. Además, a través de todos estos estudios que están localizados en la explotación y los agricultores, es improbable la participación de los agricultores en los estudios descritos arriba. Si se establece una preocupación con los agricultores como un grupo cultural en relación con la PAA, esta debe ser individual, autónoma de los decisores políticos. Esta es una importante área de desarrollo que debe adoptar la investigación, desde las preocupaciones de comportamiento en algunos estudios de participación de agricultores, y establecer el papel de ‘sanción cultural’ (Skerratt y Dent, 1994) dentro de la implantación de la PAA que debe ser adecuadamente conocida y explorada (ver también Burton, 2004b).

III. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES FINALES

En esta sección final los esfuerzos se dirigen a precisar algunos de los esfuerzos del trabajo geográfico rural en la PAA, y a tomar en consideración la evaluación de su impacto en la contribución política. Dentro de los confines de la academia es probable decir que el output colectivo de investigación en la PAA por los geógrafos rurales ha jugado un importante papel en informar a los académicos y estudiantes y en generar un debate sobre esta particular forma de política pública. Pero, ¿cómo ha sido esta influencia más allá de la academia? Esto puede ser puesto en discusión a través del trabajo de Dorling y Shaw (2002, p. 638) que plantea que el trabajo de los geógrafos no ha tenido influencia en las políticas y regulaciones «because they do not really value this kind of work». Incluso estando en desacuerdo con esta aseveración, la medida de la contribución del trabajo en geografía rural en la PAA más allá de la

academia es, como Dorling y Shaw (2002) también observan, una tarea difícil¹³. Dentro de las tres formas de PAA detalladas arriba puede jugarse con la categorización de Peck (1999) de análisis político como ‘superficial’ y ‘profundo’. Es posible argüir, que en ‘los estudios de participación de los agricultores’ la mayoría del trabajo en la PAA colectivamente puede ser visto como un acercamiento ‘superficial’ a la política de acuerdo con la terminología de Peck. El examen de los procesos superficiales para entender las regulaciones de PAA por los agricultores, los geógrafos han actuado dentro de los confines de las ayudas estatales y los objetivos de esta área de política pública, mediante investigación esencialmente de ‘evaluación de impacto’. En todo caso, el ‘análisis institucional y político’ de la PAA, particularmente los estudios que han examinado las ideas y procesos alrededor de la formulación de políticas, sugieren una forma más profunda de análisis de regulaciones, revelando que el proceso de regulación de la PAA «as a contested, politicised domain in which the parameters and exclusions of policy-making» (Peck, 1999, p.132) ha llegado a ser objeto de investigación crítica. En este contexto, los geógrafos rurales han llegado a actuar como ‘teóricos del Estado’ y han estado más preocupados con «the parameters, presumptions and premises of policies, rather than just their outcomes» (Peck, 1999, p. 133).

Situando los análisis post-estructurales de la PAA dentro de esta categorización es más difícil. Por una parte, debido a que algunos de estos estudios están preocupados con los agricultores y la implantación de los esquemas de PAA, y tienen una posición lógica de paraguas ‘superficial’. No obstante, Peck (1999) sugiere que las investigaciones superficiales sobre política tienden a tener un «closer affinity with the politically conservative and the theoretically orthodox», y como tal esta caracterización puede no ser vista como reflejo de diversidad, y algunas veces inortodoxos intereses teóricos de los investigadores que desarrollan análisis postestructurales de la PAA, que sugieren un acercamiento profundo al análisis político. El entendimiento dualístico del análisis político no debe entorpecer todas las formas actuales y posibles de investigación sobre política de PAA y puede representar un espectro que cubra desde acercamientos superficiales a otros profundos. Esto indican Bank y Mackian (2000, p.253) que argumentan que la investigación política en geografía es más profunda que superficial, «the reality is that policy formulation, implementation and evaluation are being done in a number of ways and places which allow those geographers who chose to engage considerable scope for participation».

Pero, ¿con las variadas formas de análisis en PAA es más probable que sea más efectivo? Acometiendo primero la forma superficial de este trabajo, es posible reconocer que la interrogación y evaluación de las políticas existentes y de las prácticas en las decisiones políticas, pueden revelar sus limitaciones, bases y efectos son una importante labor de investigación (Martin, 2001). En todo caso, si el análisis superficial de políticas que Peck considera esta cercano al proceso de construcción de políticas en virtud de su «political conservatism and theoretical orthodoxy»¹⁴, y porque existe una preocupación por los resultados políticos y

13 El acercamiento adoptado por estos autores para medir la influencia de la geografía en la política sanitaria ha sido visto como una contribución por algunos de los informes de los últimos años.

14 Esto sugiere no obstante que los estudios ‘superficiales’ de evaluación de impacto, que es una prominente característica de la investigación en PAA, corren el riesgo de llegar a ser un subserviente del estado, al servicio de preservar el estatus establecido porque raramente cuestionan la PAA en sí misma (Harvey y Martin, 2001).

sus impactos (Peck, 1999, p.134). Paradójicamente, no obstante, hay menos probabilidad de influencia política, al menos en un sentido profundo, desde esta posición. En todo caso, el análisis político profundo, que Peck define como políticamente liberal y teóricamente no ortodoxo, puede llevar a realizar análisis más sofisticados de la situación, acercamientos de estudio a la regulación mucho más ‘críticos’ pueden tener sus contrapartes superficiales. No obstante, quizás por este acercamiento, estos investigadores tienen menos probabilidad de acercarse al proceso de construcción de la regulación. Este es un ‘único problema político’ en geografía de acuerdo con Peck y es, además, una situación que también puede verse caracterizada en el trabajo político de la PAA. El amplio número de estudios sobre evaluación de estudios de impacto de la PAA (algunos, pero no todos, fundados en proyectos comisionados por ministerios del gobierno y agencias públicas) pueden haber influido en el detalle de los esquemas de PAA y su operatividad, pero no presentan relevancia y significado en el conjunto de la regulación de PAA ofrecido por los análisis profundos en los investigadores institucionales. Es posible decir, al margen de la forma de análisis, que puede existir un negocio de visualización de alternativas políticas futuras (Martin, 2001) con la mirada puesta más allá de la misma PAA. Sólo recientemente algunos investigadores se vienen animando a evaluar el papel de mecanismos no públicos en los que los bienes ambientales pueden ser distribuidos en la agricultura (e.j. Morris, 2000; Buller y Morris, 2004).

No obstante, para cualquiera de las tres formas de investigación en PAA detalladas aquí, el cambio permanece al ‘alcance’ de los políticos tomadores de decisiones cuando la investigación es fundada y terminada fuera de los proyectos comisionados, por ejemplo dentro del rango estándar de los foros académicos¹⁵. Como se indicaba anteriormente, los artículos de investigación en PAA no concluyen más que con recomendaciones políticas; pero, ¿reciben la información los tomadores de decisiones? A través del trabajo de Peck y Massey (1999 y 2000) argumentan que asociados con el proceso político, no escriben justamente sobre regulaciones políticas, es fundamental si la geografía pretende tener algún impacto relevante en los debates políticos, que sus comentarios contengan recomendaciones prácticas que puedan ponerlas en práctica. Massey, por ejemplo, pone de relieve las dificultades organizativas e institucionales de las relaciones academia-gobierno y como resultado argumenta que «we need both a more in-depth and sustained relationship with policy makers, and to make an effort to communicate in an accessible way», no obstante, ella no habla exactamente de cómo hacerlo. Es interesante que alguna sugerencia pueda llegar desde la geografía rural / ambiental (Burgess, 2000). Este estudio describe cómo un grupo de geógrafos facilita un análisis de toma de decisión en la formulación de un Plan Ambiental de Acción Local. Subsecuente-mente, es posible preguntarse si «work closely with [Environment] Agency staff to provide training and insights into the methods we used. In other words, to engage in reflexive process whereby social learning is advanced» (p. 284). En este camino, el trabajo de los geógrafos representa un ‘acercamiento’ más que un ‘logro’, sobretodo si es seguido a través de «how it will affect and be affected» (Massey, 2000, p. 133). Que Massey sea citada aquí es fruto de un acercamiento a la investigación sobre políticas que es ‘basado en la acción’, por ejemplo

15 Es preciso poner de manifiesto aquí que la disposición de fondos del consejo de investigación (en definitiva el más altamente valorado dentro del RAE) es cada vez más contingente dentro de los solicitantes demostrando una relevancia de ‘usuario final’, con especificidad de la naturaleza y extensión de las actividades de diseminación.

como un instigador de cambio y comportamiento activista (ver también Martin, 2001; Dorling y Shaw, 2002). La misma lección puede ser fácilmente aprendida por muchos de los geógrafos rurales dedicados a la investigación en PAA y sus alternativas, pueden ser incluidas a través de implicaciones significativas que flotan en la en esta recomendación en términos de (re) cualificación de investigadores, no como mención de su buena voluntad. No obstante, uno no puede comportarse como un geógrafo rural individual. El contexto institucional en el que la investigación geográfica rural toma lugar necesita valorar y proporcionar un mejor soporte para la investigación política, que limite que pueda permanecer como una segunda clase de ciudadanos dentro de la disciplina, que continúa enfatizando la labor ‘mental’ de la investigación teórica sobre la labor ‘manual’ de la investigación política (Peck, 1999).

AGRADECIMIENTO

Traducido por el Dr. Ángel Paniagua (CSIC).

REFERENCIAS

- BAGER, T. y PROOST, J. (1997): Voluntary regulation and farmers' environmental behaviour in Denmark and the Netherlands. *Sociologia Ruralis*, 37 (1), pp. 79-96.
- BALDOCK, D., COX, G., LOWE, P. y WINTER, M. (1990): Environmentally Sensitive Areas: incrementalism or reform? *Journal of Rural Studies*, 6, pp. 143-62.
- BANKS, M. y MACKIAN, S. (2000): Jump in! The water's warm; a comment on Peck's 'grey geography', *Transactions of the Institute of British Geographers*, 25, pp. 249-54.
- BARNETT, C. (1998): The cultural worm turns: fashion or progress in human geography? *Antipode* 30, 379-94.
- BATTERSHILL, M. y GILG, A. (1996): Traditional farming and agro-environment policy in Southwest England: back to the future? *Geoforum*, 27 (2), pp. 133-47.
- BATTERSHILL, M. y GILG, A. (1997): Socio-economic constraints and environmentally friendly farming in the Southwest of England. *Journal of Rural Studies*, 13, pp. 213-228.
- BEEDELL, J. y REHMAN, T. (2000): Using social-psychology models to understand farmers' conservation behaviour. *Journal of Rural Studies*, 16, pp. 117-127.
- BOWLER, I. (1979): *Government and Agriculture: A Spatial Perspective*. Longman, London.
- BOWLER, I. y ILBERY, B. (1987): Redefining agricultural geography. *Area* 19, pp. 327-332.
- BROTHERTON, I. (1990): Initial participation in UK set-aside and ESA schemes. *Planning Outlook*, 33 (1), pp. 46-61.
- BROTHERTON, I. (1991): What limits participation in ESAs? *Journal of Environmental Management*, 32, pp. 241-249.
- BULLER, H. y MORRIS, C. (2004): Growing goods: the market, the state and sustainable food production. *Environment and Planning A*, 36, pp. 1065-84.
- BURGESS, J. (2000): Situating knowledges, sharing values and reaching collective decisions. The cultural turn in environmental decision making, in Cook, I., Crouch, D.,

- Naylor, S., Ryan, J. (eds), *Cultural Turns / Geographical Turns*. Pearson Education, Harlow, pp. 273-87.
- BURGESS, J., CLARK, J. y HARRISON, C. (2000). Knowledges in action: an actor network analysis of a wetland agri-environment scheme. *Ecological Economics*, 35, pp. 119-132.
- BURTON, R. (2004a): Reconceptualising the behavioural approach in agricultural studies: a socio-psychological perspective. *Journal of Rural Studies*, 20, pp. 359-71.
- BURTON, R. (2004b): Seeing through the 'good farmer's' eyes: towards developing an understanding of the social symbolic value of productivist behaviour. *Sociologia Ruralis*, 44 (2), pp. 195-215.
- CARR, S. y TAIT, J. (1991): Differences in the attitudes of farmers and conservationists and their implications. *Journal of Environmental Management*, 3, pp. 281-294.
- CLARK, J. y JONES, A. (1998): Agricultural elites, agrarian beliefs, and their impact on the evolution of agri-environment policies: an examination of the British experience, 1981-92. *Environment and Planning A*, 30, pp. 2227-243.
- CLARK, J., JONES, A., POTTER, C. y LOBLEY, M. (1997): Conceptualising the evolution of the European Union's agri-environment policy: a discourse approach. *Environment and Planning A*, 29, pp. 1869-1885.
- CLARK, J. y LOWE, P. (1992): Cleaning up agriculture: environment, technology and social science. *Sociologia Ruralis*, 32 (1), pp. 11-29.
- CLARK, J. y MURDOCH, J. (1997): Local knowledge and the precarious extension of scientific networks: a reflection on three case studies. *Sociologia Ruralis*, 37, pp. 38-60.
- CLOKE, P. (1997): Country backwater to virtual village? Rural studies and 'the cultural turn'. *Journal of Rural Studies* 13, pp. 367-375.
- CLOKE, P. y MOSELEY, M. (1990): Rural geography in Britain. In P. Lowe and M. Bodiguel (eds) *Rural Studies in Britain and France*. London: Belhaven, pp. 117-135.
- COLEMAN, D., CRABTREE, B., FROUD, J. y O'CARROLL, L. (1992): Comparative Effectiveness of Conservation Mechanisms. Department of Agricultural Economics, Manchester University.
- DORLING, D. y SHAW, M. (2002): Geographies of the agenda: public policy, the discipline and its (re)'turns'. *Progress in Human Geography*, 26 (5), pp. 629-646.
- EDGEELL, J. (2000): Consultation on the Countryside Premium Scheme: creating a 'market' for information. *Journal of Rural Studies*, 16, pp. 357-366.
- EDGEELL, J. y BADGER, R. (1996): A 'new political economy' perspective on Scottish agri-environmental policy. *Scottish Agricultural Economics Review*, 9, pp. 21-33.
- FALCONER, K. (2000): Farm-level constraints on agri-environmental scheme participation: a transactional perspective. *Journal of Rural Studies*, 16, pp. 379-394.
- FISH, R., SEYMOUR, S. y WATKINS, C. (2003): Conserving English landscapes: land managers and agri-environmental policy. *Environment and Planning A*, 35, pp. 19-41.
- GASSON, R. y POTTER, C. (1988): Conservation through land diversion: a survey of farmers' attitudes. *Journal of Agricultural Economics*, 39, pp. 341-351.
- GOURLAY, D. y SLEE, B. (1988): Public preferences for landscape features: a case study of two Scottish Environmentally Sensitive Areas. *Journal of Rural Studies*, 14 (2), pp. 249-63.

- HANLEY, N., WHITBY, M. y SIMPSON, I. (1999): Assessing the success of agri-environmental policy in the UK. *Land Use Policy*, 16, pp. 67-80.
- HARRISON, C., BURGESS, J. y CLARK, C. (1998): Discounted knowledges: farmers' and residents' understandings of nature conservation goals. *Journal of Environmental Management*, 54, pp. 305-320.
- HART, K. y WILSON, G. (1998): UK implementation of agri-environment regulation 2078/92/EEC: enthusiastic supporter or reluctant participant? *Landscape Research*, 23 (3), pp. 255-72.
- HARVEY, D. (1974): What kind of geography for what kind of public policy? *Transactions of the Institute of British Geographers*, 63, pp. 18-24.
- HOGGART, K. (1996): All washed up and nowhere to go? Public policy and geographical research. *Progress in Human Geography*, 20, pp. 110-22.
- JONES, G. (1963): The diffusion of agricultural innovations. *Journal of Agricultural Economics*, 15, pp. 387-409.
- LEE, R. (2002): Geography, policy and geographical agendas – a short intervention in a continuing debate. *Progress in Human Geography*, 26 (5), pp. 627-628.
- LITTLE, J. (1999). Otherness, representation and the cultural construction of rurality. *Progress in Human Geography* 23, pp. 437-442.
- LOBLEY, M. y POTTER, C. (1998): Environmental stewardship in UK agriculture: a comparison of the Environmentally Sensitive Area Programme and the Countryside Stewardship Scheme in South East England. *Geoforum* 29 (4), 413-432.
- LOWE, P. y WARD, N. (1997): Field-level bureaucrats and the making of new moral discourses in agri-environmental controversies. In Goodman, D. and Watts, M. (eds.) *Globalising Food: Agrarian Questions and Global Restructuring*. Routledge, London, pp. 256-272.
- LOWE, P., COX, G., MACEWAN, M., O'RIORDAN, T. y WINTER, M. (1986): *Countryside Conflicts: the Politics of Farming, Forestry and Conservation*. Temple Smith / Gower, London.
- MACFARLANE, R. (1998): Implementing agri-environment policy: a landscape ecology perspective. *Journal of Environmental Planning and Management*, 41 (5), pp. 575-96.
- MACFARLANE, R. (2000): Building blocks or stumbling blocks? Landscape ecology and farm-level participation in agri-environmental policy. *Landscape Research*, 25 (3), pp. 321-331.
- MACNAUGHTON, P. y URRY, J. (1998): *Contested Natures*. Sage, London.
- MARTIN, R. (2001) Geography and public policy: the case of the missing agenda. *Progress in Human Geography*, 25 (2), pp. 189-210.
- MARTIN, R. (2002): A geography for policy, or a policy for geography? A response to Dorling and Shaw. *Progress in Human Geography*, 26 (5), pp. 642-644.
- MASSEY, D. (2000): Editorial: practising political relevance. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 25, pp. 131-33.
- MASSEY, D. (2002): Geography, policy and politics: a response to Dorling and Shaw. *Progress in Human Geography*, 26 (5), pp. 645-646.
- MCEACHERN, C., (1992): Farmers and conservation: conflict and accommodation in farming politics. *Journal of Rural Studies*, 8, pp. 159-171.

- MCHENRY, H. (1998): Wild flowers in the wrong fields are weeds! Examining farmers' constructions of conservation. *Environment and Planning A* 30, pp. 1039-1053.
- MORRIS, C. (2000): Quality Assurance Schemes: A new way of delivering environmental benefits in food production? *Journal of Environmental Planning and Management*, 43 (3), pp. 433-448.
- MORRIS, C. (2004): Networks of agri-environmental policy implementation: a case study of England's Countryside Stewardship Scheme. *Land Use Policy*, 21, pp. 177-191.
- MORRIS, C. (forthcoming): «We wanted to graze the ground closer than we were advised... but we came to an agreement»: negotiating the knowledge culture of agri-environment schemes. *Geoforum*.
- MORRIS, C. y EVANS, N. (1999): Research on the geography of agricultural change: redundant or revitalised? *Area*, 31 (4), pp. 349-358.
- MORRIS, C. y EVANS, N. (2004): Agricultural turns, geographical turns: retrospect and prospect. *Journal of Rural Studies*, 20 (1), pp. 95-111.
- MORRIS, C. y POTTER, C. (1995): Recruiting the new conservationists: farmers' adoption of agri-environmental schemes in the UK. *Journal of Rural Studies*, 11 (1), pp. 51-63.
- MORRIS, C. y YOUNG, C. (1997): Towards environmentally beneficial farming? an evaluation of the Countryside Stewardship Scheme. *Geography*, 82 (4), pp. 305-316.
- MORRIS, J., MILLS, J. y CRAWFORD, I. (2000): Promoting farmer uptake of agri-environment schemes: the Countryside Stewardship Arable Options Scheme. *Land Use Policy*, 17, pp. 241-254.
- MOSS, J.E. y CHILTON, S. M. (1990/91): Distinguishing characteristics of participating and non-participating landholders in the Mourne Mountains and Slieve Croob Environmentally Sensitive Area Scheme. *The Journal of the Irish Planning Institute*, 10, pp. 9-27.
- NEWBY, H., BELL, C., SAUNDERS, P. y ROSE, D. (1977): Farmers attitudes to conservation. *Countryside Recreation Review*, 2, pp. 23-30.
- PECK, J. (1999): Editorial: grey geography? *Transactions of the Institute of British Geographers*, 24, pp. 131-35.
- PECK, J. (2000): Jumping in, joining up and getting on. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 25, pp. 255-58.
- POLLARD, J., HENRY, N., BRYSON, J. y DANIELS, P. (2000): Shades of grey? geographers and policy. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 25, pp. 243-48.
- POTTER, C. (1988): Environmentally Sensitive Areas in England and Wales. *Land Use Policy*, 5, pp. 301-313.
- POTTER, C. y GASSON, R. (1988a): Farmer participation in voluntary land diversion schemes. *Journal of Rural Studies*, 4, pp. 365-375.
- PRIMDAHL, J. y HANSEN, B. (1993): Agriculture in Environmentally Sensitive Areas: implementing the ESA measure in Denmark. *Journal of Environmental Planning and Management*, 36, pp. 231-8.
- ROCHE, M. (2002): Rural geography: searching rural geographies. *Progress in Human Geography*, 26 (6), pp. 823-829.
- SKERRATT, S. y DENT, J. (1994): The challenge of agri-environmental subsidies: the case of Breadalbane Environmentally Sensitive Area, Scotland. *Scottish Geographical Magazine*, 112 (2), pp. 92-100.

- VAN KOPPEN, K. (2000): Resource, arcadia, lifeworld. Nature concepts in environmental sociology. *Sociologia Ruralis*, 40, pp. 300-318.
- WALSH, M. (1997): The view from the farm: farmers and agri-environmental schemes in the Yorkshire Dales. *The North West Geographer*, 1, pp. 24-35.
- WHITBY, M. (1994): *Incentives for Countryside Management: the Case of Environmentally Sensitive Areas*. CAB International, Wallingford.
- WHITBY, M. (2000): Reflections on the costs and benefits of agri-environment schemes. *Landscape Research*, 25 (3), pp. 365-374.
- WILSON, G. (1996): Farmer environmental attitudes and ESA participation. *Geoforum*, 27, pp. 115-131.
- WILSON, G. (1997a): Factors influencing farmer participation in the ESA scheme. *Journal of Environmental Management*, 50, pp. 67-93.
- WILSON, G. (1997b): Assessing the environmental impact of the ESA Scheme: a case for using farmers' environmental knowledge? *Landscape Research*, 22 (3), pp. 303-326.
- WILSON, G. y HART, K. (2000): Financial imperative or conservation concern? EU farmers' motivations for participation in voluntary agri-environmental schemes. *Environment and Planning A*, 32, pp. 2161-2185.
- WILSON, G. y HART, K. (2001): Farmer participation in agri-environmental schemes: towards conservation-oriented thinking? *Sociologia Ruralis*, 41 (2), pp. 254-274.
- WILSON, G., PETERSEN, J-E. y HOLL, A. (1999): EU member state responses to agri-environment regulation 2078/92/EEC – towards a conceptual framework? *Geoforum*, 30, pp. 185-202.
- WINTER, S. (1990) Integrating implementation research. In D. Palumbo and D. Calista (eds) *Implementation and the Policy Process: Opening up the Black Box*. Greenwood Press, Westport CT, pp. 19-38.
- WOODS, M. (1997) Researching rural conflicts: hunting, local politics and actor-networks. *Journal of Rural Studies*. 14 (3), pp. 321-340.